



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Verbal – Responsabilidad civil extracontractual
DEMANDANTE	Carlos Alberto Ramos Corena, Manuela Ramos García, Simón Ramos García, María Magdalena del Carmen Corena Benítez, Namrad Alberto Ramos Matagira, Natalia Cristina Figueroa Corena
DEMANDADOS	NTC S.A. y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
RADICADO	05001 31 03 022 2019 00183 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, uno de junio de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la codemandada NTC Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A., en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 23 de enero de 2023 el Juzgado 022 Civil del Circuito de Medellín decretó las pruebas que serían practicadas en el proceso y fijó fecha para la audiencia inicial. En relación con los medios suasorios solicitados por la parte demandada, el juzgado negó los oficios dirigidos al Tribunal de Ética Médica de Antioquia, con el fin de que se acreditara si David Majana Navarro, Lisbeth Vicent Pacheco, Carlos Gómez Bojanini, Erick Almenarez Mendoza y Daniel Andrés Correa Posada han tenido procesos disciplinarios y remitiera copia de los mismos, en tanto, los calificó de impertinentes de cara al estudio del caso, pues éste se centra en determinar si con ocasión de la nota periodística que exhibió Noticias Uno, respecto del señor Ramos Corena, en que se alude su participación en actividades delincuenciales e irregularidad en los procedimientos que ejecuta, generó la afectación que se reclama, sin que se verifique la utilidad de conocer los antecedentes legales que no son parte en el proceso. De igual modo, se negó la petición de oficiar con el mismo fin sobre el demandante directo, debido a que, la información sobre sus investigaciones reposa en los PDF 17 y 19, en los cuales se señala que al quedar ejecutoriada la sanción de 16 de marzo de 2016, ello no constituye antecedente.

De otro lado, negó la inspección judicial con exhibición de documentos en las sedes de las Clínicas Arte y Cuerpo y Especialistas del Poblado, por cuanto, no se logró determinar la pertinencia o conducencia de dicha prueba, pues la discusión se debe centrar en precisar si existió el daño moral por afectación al buen nombre del señor Corena Ramos, por emitirse la noticia que él califica de falsa, sobre el desarrollo de actividades ilícitas que derivaron en la "*bacrim de batas blancas*". En todo caso, definió que se trataba de un medio de prueba subsidiario que solo procedería en el evento en que fuera imposible verificar los hechos por medio de videgrabación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba, situación que no ocurre en este caso, pues conforme con la prueba documental y testimonial es plausible determinar los puntos a acreditar, sin perjuicio de la utilidad para el proceso.

1.2. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la codemandada NTC S.A. presentó recurso de apelación, con el fin de que el proveído impugnado fuera revocado y en su lugar se decretaran las pruebas por ella solicitadas.

Para tal efecto, señaló que, con la inspección judicial se pretende demostrar que los médicos que ejercen en las IPS Clínica Arte y Cuerpo y Clínica Especialistas del Poblado han enfrentado situación de riesgo para sus pacientes, como también que la entidad y los profesionales no han sido estrictos en el cumplimiento de las exigencias legales que imponen distintas autoridades del sector salud. Igualmente, sostuvo que no existe un medio de prueba que sustituya o reemplace la inspección judicial, porque su poderdante no puede tener acceso a esa información que reposa exclusivamente en los archivos de tales entidades. En este sentido, adujo que la prueba era conducente para verificar la forma de funcionamiento de las clínicas en mención.

En relación con la negativa de los oficios dirigidos al Tribunal de Ética Médica de Antioquia para que informara sobre la existencia de procesos disciplinarios frente a David Majana Navarro, Carlos Alberto Ramos Corena, Lisbeth Civent Pacheco, Carlos Gómez Bojanini, Eirck Almenarez Mendoza y Daniel Andrés Correa Posada, expuso que la solicitud correspondía a conocer los dichos procesos porque la noticia difundida por Noticias Uno consistió en informar la muerte de la paciente Diana Álvarez en la Clínica Arte y Cuerpo involucrada en otras denuncias similares ocurridas con anterioridad por un grupo de médicos. Anotó que, en efecto, la petición probatoria gravita en conocer información del Tribunal de Ética Médica de Antioquia, respecto de los procesos que se ha

adelantado frente a esos profesionales por presuntas irregularidades que se han presentado en el ejercicio de sus funciones en las clínicas involucradas.

Finalmente, arguyó que a pesar de que en PDF 19 obra respuesta del Tribunal de Ética Médica de Antioquia en que informó que el proceso disciplinario llevado a cabo contra el señor Ramos Corena terminó con imposición de una sanción la cual quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 2016, no constituía antecedente, lo cierto es que, ello no constituirá antecedente disciplinario ante el tribunal médico, pero no para la jurisdicción ordinaria, pues aquí no se debate asuntos de tipo disciplinario, sino la responsabilidad civil extracontractual y la supuesta indemnización de unos perjuicios, por lo que sería fundamental conocer las investigaciones adelantadas frente al demandante directo, en el ejercicio de sus funciones como profesional de la salud.

1.3. En providencia de 9 de marzo de 2023 el Juzgado 022 Civil del Circuito de Medellín concedió la alzada, pese a no haber dado traslado del recurso, sin embargo, ante el silencio de la contraparte, la eventual irregularidad quedó saneada.

CONSIDERACIONES

2.1. Los artículos 236 y 239 del C.G.P. establecen la procedencia de la inspección judicial y las reglas para la inspección de documentos. Al respecto, esas normas señalan:

"ARTÍCULO 236. PROCEDENCIA DE LA INSPECCIÓN. Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, el examen de personas, lugares, cosas o documentos.

Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videgrabación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba.

Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos.

El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede recurso.

(...)

ARTÍCULO 239. INSPECCIÓN DE COSAS MUEBLES O DOCUMENTOS. Cuando la inspección deba versar sobre cosas muebles o documentos que se hallen en poder de la parte contraria o de terceros se aplicarán también las disposiciones sobre exhibición”.

2.2. Por su parte, el artículo 266 ibídem prevé el trámite de la exhibición de documentos:

"ARTÍCULO 266. TRÁMITE DE LA EXHIBICIÓN. Quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos. Si la solicitud reúne los anteriores requisitos el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que deba hacerse.

Cuando la persona a quien se ordena la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se le notificará por aviso.

Presentado el documento el juez lo hará transcribir o reproducir, a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma manera procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de documento el juez ordenará elaborar una representación física mediante fotografías, videograbación o cualquier otro medio idóneo”.

2.3. Por otro lado, el artículo 275 del estatuto procesal señala la procedencia de la prueba por informe. En este sentido, la disposición en cita determina:

"ARTÍCULO 275. PROCEDENCIA. A petición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal. Tales informes se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento por el representante, funcionario o persona responsable del mismo.

Las partes o sus apoderados, unilateralmente o de común acuerdo, pueden solicitar ante cualquier entidad pública o privada copias de documentos, informes o actuaciones administrativas o jurisdiccionales, no sujetas a reserva legal, expresando que tienen como objeto servir de prueba en un proceso judicial en curso, o por iniciarse".

2.4. Respecto de los principios de la prueba, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC14244 de 2021 precisó lo siguiente:

"Así, el interesado no puede llevar, deliberadamente, cualquier prueba al proceso, ni acreditar cualquier supuesto fáctico. Los medios suasorios aducidos han de ser i) lícitos, ii) conducentes, iii) pertinentes y iv) útiles en relación con la controversia en la que se invocan, esto es, i) que no estén prohibidos o se hayan obtenido con violación de derechos fundamentales, ii) que sean idóneos legalmente para demostrar determinado hecho, iii) que guarden relación con los supuestos fácticos que se pretende demostrar y los que originaron la polémica, y iv) que sean necesarios para esclarecer el debate.

De suerte que, si esos presupuestos no se cumplen, el juez está habilitado para inadmitir las probanzas invocadas.

Por eso, a voces del artículo 168 del Código General del Proceso, «[e]l juez rechazará de plano, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles».

Por supuesto, ese poder que la ley ha otorgado a los administradores de justicia tampoco es irrestricto, pues, a la hora de repeler un medio de

convicción por cualquiera de esas razones debe tener certeza de que está ante una prueba ilícita, inconducente, impertinente o inútil. De lo contrario, tendrá que incorporarla al acervo probatorio, so pena de limitar, injustificadamente, el derecho a probar de las partes.

Por ese camino, cobra especial relevancia el rechazo de pruebas por ausencia de pertinencia y utilidad. Nótese que el legislador impartió directrices especiales para excluir medios probatorios por falta de dichos presupuestos, a diferencia de los licitud y conducencia. Así, frente a medios ilícitos e inconducentes autorizó su repulsión sin más, pues dispuso que «[e]l juez rechazará de plano (...) las pruebas ilícitas, (...) las inconducentes (...)», mientras que tratándose de probanzas impertinentes e inútiles facultó al juzgador a prescindir solo de aquellas que sean «notoriamente impertinentes» y «manifiestamente inútiles».

Lo que traduce, a tono con las definiciones de esos adverbios¹, que el rechazo de medios de convicción por falencias de pertinencia y utilidad solo puede tener lugar cuando aparecen de bulto, o mejor, cuando saltan a la vista de todos, es decir, cuando, de forma patente, clara y evidente queda al descubierto que la probanza invocada es ajena a las hipótesis discutidas en el pleito (impertinencia), o no presta servicio alguno al proceso (utilidad).

Ahora, que así sea no es fortuito, esas exigencias especiales tienen una razón de ser, que atañe a la naturaleza de esos presupuestos: la pertinencia y la utilidad de la prueba no siempre son de fácil determinación a la hora de evaluar su admisibilidad, y en muchas ocasiones ellas (la impertinencia y la inutilidad) solo emergen claramente una vez percibida la respectiva prueba.

Obsérvese que, si se trata de la licitud, bastará que el juzgador indague en el ordenamiento jurídico por la existencia de alguna norma que prohíba el medio de convicción o verifique si fue el resultado de la violación de algún derecho fundamental. Para determinar si es conducente, también será suficiente que efectúe un juicio de legalidad con el fin de esclarecer si la prueba invocada es apta para demostrar el hecho correspondiente.

¹ De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, «notoriamente» significa «de manera notoria», y «notoria» es una cualidad que traduce para los efectos que aquí interesan: i) público y sabido por todos, ii) cierto, evidente. Por su parte, la palabra «manifiestamente» quiere decir «de manera manifiesta», representando este adjetivo, el concepto de «descubierto, patente, claro».

Es decir, su labor, en últimas, se contrae a comparar el medio probatorio con la Constitución y la ley.

Pero si se trata de valorar la pertinencia y utilidad del medio, no siempre resulta sencillo, dado que el respectivo análisis debe hacerse a la luz de los hechos discutidos, de cuya existencia y alcance no se tiene certeza, así como tampoco de la información que la probanza puede aportar al proceso, en tanto solo se cuenta con el dicho de la parte”.

CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si la juez de primer grado tuvo razón al negar el decreto de los medios probatorios pedidos por la parte codemandada, a saber, oficios dirigidos al Tribunal de Ética Médica de Antioquia para que acreditara la existencia de procesos disciplinarios de David Majana Navarro, Lisbeth Vicent Pacheco, Carlos Gómez Bojanini, Erick Almenarez Mendoza y Daniel Andrés Correa Posada, debido a que, se tornaba improcedente de cara al estudio del proceso, pues éste se centra en determinar si con ocasión de la noticia exhibida por Noticias Uno en relación con el señor Ramos Corena, en la cual se aludió a su participación en actividades delictivas e irregularidad en los procedimientos que ejecuta, generó la afectación que hoy se reclama, sin que se verifique la utilidad de conocer los antecedentes de galenos que no son parte del proceso. De igual modo, el juzgado de primer nivel negó oficiar a la referida entidad con el objetivo de conocer los antecedentes del demandante directo, en tanto, la información de las investigaciones reposa en el plenario.

Por otro lado, el despacho negó la inspección judicial con exhibición de documentos en la Clínica Arte y Cuerpo y Clínica Especialistas del Poblado, por cuanto, no se lograba determinar la pertinencia y conducencia de dicha prueba, pues la discusión se ciñe en definir si existió daño moral por afectación al buen nombre del señor Ramos Corena, por la emisión de la noticia por presunta participación en actividades ilícitas que derivaron en la "*bacrim de batas blancas*".

Al respecto se observa ajustado a derecho lo definido por la falladora de primera instancia, quien tuvo razón al determinar que los oficios solicitados, son prueba impertinente para el objeto del proceso en la medida en que las pretensiones de la demanda están dirigidas a que se declare la responsabilidad de NTC S.A. y de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por la emisión de la noticia

en que el médico Carlos Alberto Ramos Corena se vio involucrado, por la presunta participación en actividades delictivas e irregularidades en los procedimientos quirúrgicos que practica, en este sentido, luce impertinente e inútil oficiar al Tribunal de Ética Médica de Antioquia para que acredite la existencia de procesos disciplinarios de personas que, como David Majana Navarro, Lisbeth Vicent Pachecho, Carlos Gómez Bojanini, Erick Almenarez Mendoza y Daniel Andrés Correa Posada, no están vinculadas al presente proceso, pues en caso de que existiese o no procesos disciplinarios respecto de los mencionados, ello no comportaría una información útil para el caso de marras, ya que, lo debatido aquí es la eventual responsabilidad de los demandados por la emisión de la noticia que relacionó al señor Ramos Corena y no la hipotética responsabilidad de las clínicas que contratan con los referidos galenos.

De igual modo, se tiene que en lo atinente a la solicitud de oficio dirigido al Tribunal de Ética Médica para que certifique los procesos disciplinarios de Carlos Alberto Ramos Corena, el medio suasorio también resulta innecesario, pues como la juez de instancia bien lo señaló, dicha información reposa en el plenario en los archivos de PDF 17 y 19, en los cuales, el Tribunal de Ética Médica da respuesta a los derechos de petición presentados por los apoderados judiciales de la parte demandante y en que se informa las decisiones adoptadas por el tribunal en los procesos disciplinarios adelantados frente al señor Ramos Corena, además de precisar que la única sanción impuesta al galeno quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 2016 y al haber transcurrido más de cinco años desde dicha data, la misma no constituye antecedente disciplinario. En este sentido, carece de utilidad oficiar al Tribunal de Ética Médica de Antioquia para que brinde una información que en el proceso ya se conoce, otorgada por la misma entidad en respuesta a derechos de petición presentados.

Ahora, en lo que tiene que ver con la inspección judicial con exhibición de documentos a las Clínicas Arte y Cuerpo y Especialistas del Poblado, se infiere que la misma es impertinente e inconducente, pues la información que se lograre recaudar no tendría incidencia alguna en el objeto del proceso, pues la actividad y los procesos que desarrollen las clínicas en mención nada tiene que ver con la presunta responsabilidad de los demandados por la emisión de la noticia del señor Ramos Corena, y si bien puede existir alguna relación contractual o laboral entre el demandante y las clínicas en comento, tales circunstancias no demostrarían los medios exceptivos propuestos por el extremo procesal pasivo.

Adicionalmente, en atención a los argumentos expuestos por el apoderado del recurrente con los cuales indica que lo pretendido con dicho medio de prueba es dar cuenta del ingreso de pacientes, su tratamiento, los decesos o reclamos de los mismos y/o sus deudos, como también los permisos y licencias con las que cuenta la entidad para operar, el listado de médicos que desde allí ejercen su profesión e igualmente los documentos que acrediten la idoneidad de tales profesionales y del reconocimiento u homologación de títulos obtenidos en el exterior por parte del Ministerio de Educación Nacional, cabe precisar que a la juez de primer grado le asiste razón, pues dicha información puede ser obtenida con otros medios de convicción que se practicará en el proceso, tales como los documentos aportados en la demanda y sus contestaciones, los interrogatorios de parte de los demandantes, los testimonios de Ignacio Gómez Gómez, Cecilia Orozco Tascón y Luis Fernando Botero Gutiérrez, quienes declararán sobre los antecedentes, problemas con pacientes y problemas judiciales del demandante directo, así como el modo de proceder e idoneidad del señor Ramos Corena.

En consecuencia, la providencia proferida el 23 de enero de 2023 por el Juzgado 022 Civil del Circuito de Medellín será confirmada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 23 de enero de 2023, proferida por el Juzgado 022 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Se condena en costas a la parte recurrente y como agencias en derecho se fija la suma de 1 SMLMV.

NOTIFÍQUESE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada